

## A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, sobre **La calidad y la disminución de los tiempos de espera para recibir las prestaciones reguladas por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía personal y Atención a la Dependencia.**

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En relación a los derechos reconocidos en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y la atención a las Personas en Situación de Dependencia y siguiendo los datos de febrero de 2016 publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, 1.605.026 personas en nuestro país, es decir el 3,44 % de la población española, considera que no puede desarrollar actividades básicas de la vida diaria sin recibir algún tipo de apoyo, por lo que ha iniciado un procedimiento vinculado a esta Ley. De estas solicitudes 101.079 están esperando ser valoradas y recibir dictamen. El dato que no se publica oficialmente en este informe mensual de gestión, es el tiempo de espera que las 801.847 personas, que sí reciben prestación, han tenido que soportar hasta que se hiciera efectiva.

Cuando una persona necesita apoyo para desenvolverse en el día a día, cada mes de espera para recibir los servicios y prestaciones adecuadas, repercuten en el empeoramiento de su calidad de vida y en la de su entorno familiar y/o de apoyo. El procedimiento desde que se formaliza la solicitud, se recibe el dictamen y se accede de forma efectiva a las prestaciones y servicios, sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y desigual entre las distintas comunidades Autónomas. En relación a estos tiempos de espera, la situación en Castilla y León, Andalucía, Aragón y País Vasco siendo inasumibles, están por debajo de la media de otras comunidades como Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana o Canarias.

Según el XVI Dictamen del Observatorio de La Dependencia elaborado por la asociación de Directores de Servicios Sociales y publicado en febrero de 2016, un total de “125.914 personas han fallecido en lista de espera desde el 2012”. Estas personas no llegaron a cubrir sus expectativas de recibir un servicio o prestación que por derecho le correspondía y que sin duda, tenían una incidencia directa en su calidad de vida y en la de sus cuidadoras. Esto es inasumible para nuestra sociedad. Esta misma asociación calcula que se tarda entre 8 y 15 meses desde que se evalúa a la persona hasta que se le efectúa su informe, algo inexplicable teniendo en cuenta los sistemas integrados y las herramientas de gestión de la información con los que cuenta actualmente nuestras Administraciones Públicas.

La idea de eficacia de la Administración Pública tiene la consideración de principio constitucional (art. 103.1 CE). La eficacia exige que la función administrativa se desenvuelva con rapidez y con celeridad. La ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, alude en diversos preceptos a la idea de celeridad (art. 75) y a la de eficacia (art. 3.1 y 4.1.d), y también a la de eficiencia (3.2). Estos preceptos se han demostrado, por sí solos, insuficientes para la resolución de procedimientos vinculados a esta Ley.

Por ello, y sin perjuicio que sea necesario articular procedimientos de urgencia que atienden situaciones de emergencia ciudadana, consideramos necesario acotar los tiempos máximos de resolución de grado y nivel, así como los tiempos máximos para recibir las prestaciones y los servicios estipulados en el catálogo de dicha Ley e incluidos en el Programa Individual de Atención de cada persona.

Por otro lado, la gestión del servicio de Ayuda a Domicilio (SAAD) que la propia ley deja abierto a la externalización de su gestión en el ejercicio de su competencia a nivel municipal, ha abierto una problemática basada en la precariedad de quienes trabajan en el sector y una deficiencia de la calidad en el servicio a los y las personas beneficiarias. Abaratar costes y precarizar a los y las trabajadoras repercute de forma inequívoca en la calidad del servicio prestado.

El SAAD no es solo un derecho universal sino que además muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. En 2015, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 38,3%. Es por ello un sistema que debe ser protegido y apoyado dada las posibilidades que ofrece para el crecimiento no sólo social sino también económico.

La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente, señalando la gestión directa - gestión por la propia Entidad Local, organismo autónomo local, Entidad pública empresarial local, sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública - e indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.

La externalización del SAAD, a través de contrataciones públicas sin criterios sociales han derivado en inestabilidad y rotatividad de las personas trabajadoras en dicho servicio. Entre las personas usuarias y profesionales se crea un vínculo que va más allá de la relación prestacional, incidiendo este vínculo de manera directa en la salud de las personas dependientes, teniendo en cuenta el carácter integral del concepto de salud. Por estas razones es de vital importancia la estancia de la persona en situación de dependencia en su medio, siempre que las condiciones lo permitan, lo que incluye de manera inequívoca la estabilidad y continuidad del profesional.

Por todo ello se presenta la siguiente:

**PROPOSICIÓN NO DE LEY**

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incluir en la Ley un plazo máximo de 6 meses desde que se formaliza la solicitud hasta que se recibe la prestación o servicio contemplados en el Programa Individual de Atención.
2. Incluir en la Ley la priorización de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Administración Local. En el caso de que no sea posible, de manera fundamentada y documentada, establecer en los pliegos de contratación pública criterios sociales, así como mecanismos de seguimiento y control, velando porque la prestación de servicio esté orientada por los principios fundamentales de los servicios sociales, destacando prevención, fomento de la cohesión social, atención personalizada e integral, fomento de la autonomía personal, calidad y continuidad.

Congreso de los Diputados, Madrid, 11 de abril de 2016

Ana Belén Terrón Berbel

Íñigo Errejón Galván

Marta Domínguez Álvarez

Diputadas del Grupo Parlamentario  
Podemos-En Comú Podem-En Marea

Portavoz del Grupo Parlamentario  
Podemos-En Comú Podem-En Marea